

LAS AMENAZAS MILITARES A LA DEMOCRACIA Y LA OPINIÓN DEL VENEZOLANO*

*Gladys Villarroel***

Resumen

La notable estabilidad política de la democracia venezolana se atribuye a la peculiar relación entre los sectores civil y militar. Los dos golpes militares fracasados de 1992 y su impacto político hacen temer por el futuro de la democracia en Venezuela.

En el marco de una investigación más amplia, a finales de 1993 se interrogó a una muestra nacional probabilística de 1338 individuos acerca del papel de las fuerzas armadas en la vida nacional, sobre los golpes militares en general y sobre si justificaban o rechazaban los dos alzamientos militares de 1992. Se consideró también la opinión acerca de la actuación del gobierno para controlar las sublevaciones y en

relación con la destitución del ex Presidente Carlos Andrés Pérez. Se procesaron los datos mediante diferentes técnicas de análisis factorial. Los resultados indican que al venezolano le interesa la política y que la opinión pública está dividida entre los que favorecen y los que se oponen a la intervención militar a través de golpes de Estado. Esta división de la opinión no implica, sin embargo, polarización. En las correspondencias se identifica una tensión entre la legitimidad y la ilegitimidad sociológica de la intervención militar. De la tipología construida resultan seis tipos que van desde los antigolpistas radicales hasta los progolpistas por principio. El análisis de estos resultados sugiere que

Recibido: 03-09-97 • Aceptado: 26-09-97

* Los resultados que se presentan en este artículo provienen del proyecto *Representaciones y Comportamientos Políticos del Venezolano* que recibió apoyo financiero del CONICIT (S1 2243) y del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela. e-mail: gvilla@conicit.ve

** Escuela de Educación, Universidad Central de Venezuela y Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). Caracas, Venezuela.

en la cultura política venezolana coexisten dos orientaciones: una autoritaria y antidemocrática y otra genuinamente comprometida con la democracia, aunque ninguna es predominante.

Palabras clave: Cultura política, democracia, autoritarismo, golpes militares.

Military threats to democracy and Public Opinion

Abstract

The political stability of Venezuelan democracy used to be attributed in great part to the special relationship between the military and the civil sector. However, the unsuccessful military coups in 1992 and their political aftermath have raised fears about the future of democracy in Venezuela.

In the framework of a major investigation towards the end of 1993, a national probabilistic sample of 1338 individuals was interviewed on the role of the armed forces in national life, on military coups in general, and on whether or not the 1992 uprisings were justified. In addition opinions were sought about the performance of the government in relation to the uprisings, and about the destitution of former president Carlos Andrés Pérez. Data processing was carried out through different techniques of factorial analysis.

The results show that Venezuelans are interested in politics and also that public opinion is divided between those who reject and those who favor military intervention in politics through military coups. However, this division does not imply polarization. Data processing through multiple correspondence analysis revealed tension between sociological legitimacy and illegitimacy about military intervention. Cluster analysis revealed six types of people grouped according to similarity of responses. These types range from radical anti-coup to principled pro-coup and their analysis indicate that mass political culture in Venezuela have both authoritarian-militaristic and democratic tendencies, though neither dominate.

Key words: Political culture, democracy, authoritarianism, military uprisings.

Introducción

Venezuela ha tenido más de treinta años continuos de gobiernos democráticamente electos. En buena medida esta notable estabilidad política se atribuía a la peculiaridad de la relación entre el sector militar y el sector civil, característica de la democracia venezolana. Los dos intentos de golpe fallidos de 1992¹ y su impacto político, sin embargo, hacen temer por su futuro. Este artículo examina varias interpretaciones de esos eventos y presenta las correspondencias y la tipología de la opinión del venezolano en relación con el papel de los militares en la vida nacional, las dos intentonas golpistas de 1992 y la destitución del, para entonces, presidente Carlos Andrés Pérez. A partir de los resultados, se consideran también las orientaciones democráticas y autoritarias presentes en la cultura política.

La envidiable estabilidad política de nuestra democracia resaltaba vivamente en la década de los ochenta, cuando la norma en los países latinoamericanos era la inestabilidad y el predominio de gobiernos militares. Se llegó a hablar, en este sentido, de la "excepcionalidad venezolana". Ello se definía en términos del profesionalismo y apego a la Constitución de las fuerzas armadas; de acuerdo a la cooperación existente entre los dos grandes partidos, Acción Democrática y Copei, para evitar la polarización, y en relación con la atención que las élites políticas otorgaban, vía los ingresos petroleros, a las demandas de la población (Goodman et al, 1995:3). Así, se daba por sentado que la democracia venezolana había alejado definitivamente las posibilidades de un golpe de estado y, en consecuencia, de un gobierno militar. Las dos intentonas golpistas de 1992, sin embargo, han traído nuevamente a la discusión la cuestión de los militares y su rol en la sociedad venezolana.

1 Para el relato de lo ocurrido durante el primer intento de golpe véase *Amaneció de golpe*, Caracas, IIES, UCAB, especialmente el trabajo de M.G. Ponce. También en Sonntag y Maingón (1992). Una aproximación más vivencial en Tarre Briceño (1994). Sobre lo ocurrido el 27 de noviembre de 1992 véase Sosa (1993).

Los intentos de golpe de 1992

Los levantamientos militares de 1992 y su impacto sobre la vida nacional han sido vistos como la más seria crisis política que Venezuela ha enfrentado desde 1958. Es evidente que la democracia venezolana está pasando por tiempos difíciles, cuyo signo más obvio es el descalabro de las instituciones políticas. Mucho se ha dicho acerca del desgaste del sistema populista de conciliación²; de la pérdida o el deterioro de la legitimidad política y de la reducción o del rompimiento definitivo del consenso que sostuvo la democracia venezolana durante más de treinta años (Alvarez, 1992:20-31; Sonntag y Maingón, 1992:15). Por otra parte, las insurgencias militares han sido interpretadas desde la perspectiva del impacto que la crisis política ha tenido en la erosión de las complejas relaciones entre civiles y militares y de la propia crisis interna de las fuerzas armadas (Sosa, 1992b; España, 1992b; Luengo, 1992; Ponce: 1992).

Los acontecimientos de 1992 revelan que, a diferencia de otros casos de amenaza a la democracia, en Venezuela no había ni una alta polarización, ni una ruptura de la unidad básica de las élites. Los levantamientos militares fueron de naturaleza militar y no involucraron a sectores civiles importantes (Agüero, 1993:192).

El deterioro de las instituciones políticas tuvo efectos en el lado militar. La partidización del sistema político, la pérdida de legitimidad de las élites y la disminución de la participación electoral son algunos de los indicadores del descalabro institucional del orden político. La crisis en el sector civil, sobre todo el desprestigio de las instituciones y los líderes políticos, puede considerarse como un factor clave en la explicación de los levantamientos militares (Agüero, 1993:190-191; Burggraaff y Millett, 1995:55).

El descontento militar y las rebeliones de 1992, por otro lado, se han atribuido también a la utilización de las fuerzas armadas en el control de desórdenes civiles (Agüero, 1993:194-195) y al hecho de que los militares consideraban que la situación del país era de *anarquía social* (Burggraaff y

2 J.C. Rey (1980: 257-338 y 1987: 190-191) habla de "sistema populista de conciliación" para referirse a la cultura, el estilo y las reglas informales que rigen la vida política en Venezuela a partir de 1958. El propósito central de esta cultura normativa es la preservación y legitimación del orden sociopolítico democrático.

Millet, 1995:55). El sector militar, además, criticaba ciertas actuaciones del sector civil en relación con su institución. Del lado militar se tenía la percepción de que ciertos dispositivos de control civil y la injerencia en los ascensos estaban lesionando los intereses corporativos de las fuerzas armadas y afectando su autonomía interna. Estas condiciones ampliaron el resentimiento de los militares y condujeron a las intentonas golpistas de 1992 (Agüero, 1993:196-199; 1995:137).

A lo anterior hay que añadir el programa de reformas estructurales emprendido en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, con el consiguiente agravamiento de las condiciones socioeconómicas del país, y el descontento generalizado en la población con las actuaciones del gobierno y en relación con la corrupción. Particularmente importante es la insatisfacción de los militares en lo que concierne a los efectos de la crisis económica en su propio nivel de vida, sobre todo en los estratos inferiores de la institución. A esto se sumó el tratamiento que la administración de Pérez dio a asuntos muy sensibles desde la perspectiva militar, como la cuestión del Golfo de Venezuela; la injerencia política en los ascensos, y la ruptura de la unidad institucional y de mando al interior de las fuerzas armadas (Burggraaff y Millett, 1995:55).

Las insurrecciones militares de 1992 se han atribuido también a fallas o distorsiones en la formación intelectual de los oficiales venezolanos. Se ha sugerido que estas distorsiones derivan parcialmente de la natural admiración hacia la figura de Bolívar presente en la educación militar. De allí ha surgido cierto "culto mesiánico" que reduce la complejidad de la vida política y busca soluciones simples a los problemas del país. La simplificación y la mitificación de las ideas de Bolívar sirven para legitimar ambiciones políticas de naturaleza autoritaria; encubre deficiencias y opera como un dispositivo mesiánico que conecta la imagen de Bolívar con acciones concretas y providenciales que se supone ajustadas al ideal bolivariano. Esta visión está extendida en la sociedad y en las fuerzas armadas y se encuentra tras los intentos golpistas de 1992. En estas representaciones se articula una visión de la sociedad y la política extremadamente simple, un nacionalismo extremo, ideas autoritarias y desprecio por los procedimientos democráticos (Romero, 1994:34-35).

Los líderes de los alzamientos, por su parte, se ven a sí mismos como los garantes de una genuina democracia al apoyar al pueblo en sus demandas y en sus críticas hacia una clase política corrupta. Esta retórica y la constante evocación de los ideales de Bolívar y otras figuras históricas como justificación

de sus acciones, puede representar un intento de rechazar las complejas realidades inherentes a las democracias modernas y el deseo de encontrar soluciones simples para los problemas presentes. Se ha señalado, además, que el régimen educativo militar ha fallado pues no ha sabido transmitir una adecuada comprensión de la naturaleza de la democracia y del rol de las fuerzas armadas en los regímenes democráticos. Sobre todo debido al énfasis puesto en los ideales, el sacrificio y el orgullo nacional. Rasgos que son poco eficaces cuando se tiene que lidiar con las tortuosidades de la vida política y, especialmente, cuando se atribuye a aquellas la función de salvaguardar y defender la democracia (Burggraaff y Millet, 1995:64;74).

Se ha argumentado también que la socialización del militar en el resguardo del orden político democrático ha tenido un efecto perverso, mediante el cual el estamento ha pasado de ser guardián, a ser juez y jurado (Rodríguez, 1996:187). Se ha considerado asimismo que la formación ética de los militares los induce a tomar posiciones globales frente a los problemas sociales. Posiciones que impedirían distinguir entre causas y efectos cuando se evalúan procesos políticos y sociales complejos. La acción política se entiende como acción militar y se confía excesivamente en la eficacia de ésta última (Sosa, 1992c: 68-70).

La población y los alzamientos militares de 1992

Si bien las preferencias del venezolano se inclinaban hacia la democracia (Baloyra, 1983), la alternativa de una salida militar a los conflictos siempre ha estado presente en la visión y las representaciones del venezolano acerca del orden político. En 1973, por ejemplo, 51% de los entrevistados opinaba que existían ocasiones en las cuales un golpe estaba justificado. En respuesta a la pregunta sobre el papel de los militares en la vida nacional, 31% opinaba que deben respetar el orden constitucional, pero, 35% pensaba que las fuerzas armadas deben apoyar la voluntad popular cuando el gobierno no responda a las aspiraciones del pueblo (Baloyra y Martz, 1979:227). Otras encuestas de 1971 y 1980 reportan que más de un tercio de los entrevistados prefería como presidente del país a un militar (Templeton, 1995:100-101).

Pero, ¿qué pensaba la gente de los levantamientos militares de 1992? ¿Cómo reaccionó la población en esos momentos? Es poca la información científicamente establecida acerca de esos hechos. En la prensa de los días posteriores al levantamiento de febrero se registran declaraciones de personas que afirma-

ban haber *aplaudido a los golpistas*, aunque estaban en contra de la dictadura como forma gobierno, para que se *comience a ejercer la democracia con efectividad* y porque *hay un descontento general y la gente está cansada de que se le prometan cosas que nunca se cumplen*³.

La apreciación global de los hechos aunque difiere en los grados de simpatía o apoyo recibidos por los insurgentes no deja lugar a dudas. El primer intento golpista despertó simpatías en la población. Para algunos éstas fueron considerables (Templeton, 1995:80), para otros se trató sólo de ciertas manifestaciones de solidaridad con los militares insurgentes en Valencia y Caracas (Ponce, 1992:13). Otros analistas registran una respuesta emocional de simpatía inicial que no puede interpretarse como apoyo popular a la intentona (Sosa, 1992a: 73), mientras algunos afirman que estas reacciones iniciales fueron sobreestimadas dado que sólo 20% de los venezolanos, según algunas encuestas, aprobó el levantamiento (Sonntag y Maingón, 1992:47).

El alzamiento militar del 27 de noviembre, según se reporta en la prensa, fue mucho más violento que la intentona militar de febrero y fracasó porque no contó con el apoyo popular ni de las fuerzas armadas⁴. Según encuestas realizadas en Caracas, 95% de los entrevistados rechazaban la violencia del alzamiento considerándolo *un horror, algo criminal, una vergüenza y una traición a la patria*⁵. Aunque esta sublevación contó con ciertas manifestaciones esporádicas de aplauso, éstas no se tradujeron en la insurrección civil a la cual llamaban los militares golpistas. Por el contrario, la reacción de la población a esta intentona reveló *un grado de maduración social y de conciencia política en los venezolanos* además de la destrucción de algunos mitos políticos puestos en circulación por la insurrección militar de febrero (Sosa, 1993:38;44-45). Se ha dicho también que el 27N significó la *recuperación de la autoridad del gobierno*, aunque se ha sostenido que la democracia se mantuvo no porque la gente la defendió abiertamente, sino, más bien, porque no la atacó⁶.

Un estudio realizado en 1993 revela que para 77,4% de los entrevistados el golpe de estado no es una salida a la crisis actual. Sin embargo, en relación

3 El Nacional: 6 febrero 1992, C/1; y 5 febrero 1992 C/1.

4 El Nacional, 1º dic. 1992, A/6.

5 El Nacional, 1º dic. 1992, D/4.

6 H. Njaim, 1992, El Diario de Caracas, 4 diciembre 1992.

con el intento de golpe del 4 de febrero, sólo 5,3% hubiese manifestado en contra de haber podido hacer algo, 38,7% hubiese manifestado a favor; mientras que 52,4% no hubiese hecho nada frente a la insurrección. Así mismo, de acuerdo a la opinión de los entrevistados sobre el líder del alzamiento, un poco más de 20% con una opinión favorable a Chávez, considera el golpe de estado como una salida viable a la crisis del país (Njaim et al., 1993).

Métodos

En 1993, se entrevistó una muestra nacional con el propósito de conocer cuáles son las opiniones y las creencias del venezolano en relación con el papel de los militares en la vida del país, acerca de los golpes y las dos sublevaciones de 1992, y de su principal consecuencia política, la destitución de Carlos Andrés Pérez. Las entrevistas formaban parte de una investigación más amplia cuyos datos técnicos se ofrecen a continuación.

Universo y muestra

El universo estuvo constituido por los venezolanos mayores de 18 años que no fuesen militares activos en el momento de recolección de los datos. El marco muestral fue el generado por el XI Censo General de Población y Vivienda (OCEI, 1990). La fracción de muestreo calculada resultó igual a $f=1/950$. El tipo de muestreo fue probabilístico, con selección sistemática aleatoria y control de variables en todas sus etapas.

La unidad de muestreo fue el hogar. La selección de unidades de muestreo para las que se poseía información en cuanto al número de viviendas se llevó a cabo con probabilidad proporcional al tamaño. La selección de manzanas o áreas dentro de las parroquias o municipios se realizó en forma aleatoria simple; mientras que para la selección de las viviendas dentro de las manzanas se procedió en forma sistemática con arranque aleatorio, previo el levantamiento del número de viviendas en las manzanas que entraron en la muestra. Se consideró informante calificado a toda persona mayor de edad, de uno u otro sexo, venezolano/a, que se encontró en su lugar de residencia fija al momento de realizarse la entrevista. La selección del informante también se hizo aleatoria-

mente mediante un dispositivo incorporado al instrumento de recolección de información.

El tamaño de la muestra nacional fue $n=1338$, con un nivel de confianza de 95% y un error máximo de estimación de 5%. Todas las entrevistas fueron realizadas en los hogares mediante un cuestionario de 105 preguntas, 103 cerradas y 3 abiertas, previamente evaluado en tres pruebas piloto. La recolección de los datos se cumplió durante seis semanas entre octubre y noviembre de 1993.

Las variables

Las 6 variables incluidas en este trabajo conciernen a la opinión del venezolano sobre el papel de los militares en la vida nacional y acerca de los acontecimientos políticos de 1992 y 1993. La primera, referida a la opinión sobre los golpes militares en general: *¿Piensa Ud. que hay ocasiones en las cuales se justifican los golpes militares o no?*; las modalidades de respuesta eran *sí, no y depende*. Dos variables exploraban la legitimidad sociológica de las intenciones golpistas de 1992. La primera, referida al golpe militar del 4 de febrero, la segunda aludía a la sublevación del 27 de noviembre. En ambos casos las alternativas eran dicotómicas: *se justificaba o no se justificaba* la acción de los militares. Adicionalmente, se indagó acerca de la orientación normativa que, a juicio del entrevistado, debe regir el rol de aquellos en el país a través de la siguiente pregunta *¿Cuál de las frases de la siguiente lista expresa mejor su pensamiento acerca del papel que deben jugar las Fuerzas Armadas en la vida nacional?*; las alternativas de respuesta eran: *siempre deben respetar el orden constitucional; deben actuar en política solamente cuando piensen que no se está cumpliendo la Constitución; deben respaldar la voluntad popular cuando el régimen no corresponda a las aspiraciones del pueblo, y deben intervenir en política siempre que lo juzguen necesario*. Para efectos del procesamiento de datos (ver punto siguiente), esta pregunta se convirtió en una variable con sólo tres alternativas de respuesta: *los militares deben respetar la constitución; los militares deben intervenir en política, bien cuando no se cumple la constitución o bien cuando lo juzguen necesario, y los militares deben apoyar al pueblo*; además, desde luego, de la modalidad *no sabe*. Las dos últimas variables procesadas conciernen, la primera, a la opinión sobre la respuesta del gobierno de Carlos Andrés Pérez frente a las intenciones golpistas, si la consideran

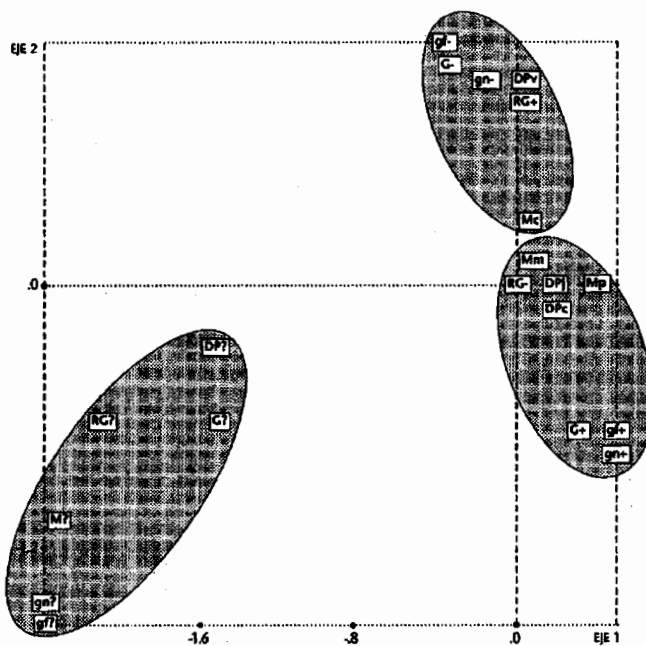
correcta o incorrecta; la segunda, atañe a la evaluación por parte de los entrevistados de la destitución del ex-presidente, las alternativas de respuesta eran *fue una venganza política, un castigo a la corrupción y un acto de justicia*⁷.

Procesamiento y análisis de datos

Se procesaron los datos mediante diferentes técnicas de análisis factorial con dos finalidades. Primero, encontrar asociaciones estadísticas entre las modalidades de respuesta concernidas; y, segundo, construir una tipología. Se utilizó el *Système Portable pour l'analyse des données, version numerique, 2.52* (SPAD. N., Cisia, 1987; 1993). Se trabajó con tres procedimientos de análisis multivariable. Para la descripción y ordenamiento de los individuos y de las variables se utilizó la caracterización de variables nominales (DEMOM). Para la descripción de las asociaciones entre las variables se usó el análisis de correspondencias múltiples (CORMU), definiendo como activas a las 6 variables ya mencionadas. Se ventiló al azar, con un umbral de 2%, a las modalidades con una baja frecuencia, resultando 20 modalidades asociadas. Finalmente, se procesaron los datos mediante la clasificación automática para agrupar a los individuos en clases de acuerdo a las semejanzas de sus respuestas y para saber quiénes y cuántos son los miembros de cada clase resultante.

Se trabajó a partir de una matriz constituida por los individuos (n=1338) entrevistados y las 6 variables descritas anteriormente, con 20 modalidades de respuesta asociadas. Para el análisis de los resultados se examinó sistemáticamente el comportamiento de las variables en la constitución del primer eje factorial, es decir, planos factoriales 1/2; 1/3; 1/4 y 1/5. Luego se consideró el plano factorial 2/3 para establecer la mejor representación de las asociaciones. Se eligió como tal al plano factorial 1/2 (gráfico 1).

7 Estas modalidades surgieron de la categorización de las respuestas a esta pregunta abierta en las pruebas piloto. La venganza fue atribuida como razón de la destitución de Pérez, en estas pruebas, por una tercera parte de los entrevistados, se consideraba que la destitución era obra de sus enemigos políticos. En cuanto a considerarla un "acto de justicia" esta modalidad alude a la crítica situación del país, es decir, se responsabilizaba al ex-presidente por la crisis nacional.



Fuente: Encuesta S1 2243

Gráfico 1
Correspondencias entre modalidades
Plano Factorial 1/2

Resultados

Análisis de correspondencias múltiples

En relación con las variables procesadas, el eje factorial 1 (horizontal) establece una primera distinción. En efecto, en el lado derecho del gráfico aparecen las modalidades que indican una toma de posición en relación con la destitución de Carlos Andrés Pérez (DPv, DPj, DPc); con el rol de los militares en la vida nacional (Mm, Mp, Mc); con respecto al apoyo de los golpes en general (G+) y de las insurgencias golpistas de 1992 (gf+ y gn+). En oposición a estas modalidades, encontramos en el extremo izquierdo del gráfico las modalidades PD?, RG?, M?, G?, gf? y gn?, es decir, aquellas que recogen la *no opinión* con respecto de las variables involucradas. El eje factorial 2 (vertical representa la

tensión entre la *legitimidad* y la *ilegitimidad* sociológica de la intervención militar en la vida política. En efecto, el factor opone en el cuadrante superior izquierdo aquellas modalidades que no la justifican en ningún caso (G-, gf- y gn-) a las modalidades, en el cuadrante inferior derecho que, por el contrario, justifican la intervención de los militares en los asuntos políticos mediante golpes de estado (G+, gf+ y gn+).

Visto en detalle el cruce de los ejes factoriales 1 y 2, correspondiente al plano factorial 1/2, se observan tres nubes de puntos. En la primera, ubicada en los cuadrantes superiores del gráfico 1, aparecen asociadas, con una contribución importante a la formación del eje, las modalidades que no justifican ni los golpes militares en general (G-), ni las intentonas golpistas de 1992 (gf- y gn-). En esta nube también se asocia la alternativa que estima correcta la respuesta del gobierno (RG+) y la que considera la destitución de Pérez como una *venganza política* (DPv). Con una contribución menor, está la modalidad *los militares deben respetar el orden constitucional* (Mc). Esta nube representa la tendencia de la opinión pública que encuentra ilegítima su intervención en la política a través de golpes de Estado, y que, en consecuencia, no justifica las intentonas golpistas de 1992, apoya la acción gubernamental frente a estas insurgencias y considera la destitución del ex-presidente Pérez como una venganza de sus enemigos políticos.

En el cuadrante inferior derecho del gráfico se observa una segunda nube de puntos. Con una contribución importante a la formación del eje, aparecen asociadas las modalidades que justifican la intervención militar en la política mediante golpes, tanto en general cuanto en relación con los alzamientos del 4F y del 27N (G+, gf+ y gn+). Con una contribución menor aparecen asociadas las modalidades *los militares deben respaldar al pueblo* (Mp); dos modalidades que atañen a la destitución de Carlos Andrés Pérez: fue un castigo a la corrupción (DPc) y fue un acto de justicia (DPj) y la respuesta del gobierno fue incorrecta (RG-). Esta nube representa una orientación autoritaria de la cultura política que favorece o encuentra legítima la actuación de los militares en los asuntos políticos mediante golpes de estado, rechaza las acciones gubernamentales para controlar los levantamientos de 1992. Adicionalmente, las correspondencias indican un fuerte rechazo hacia la figura del ex-presidente Pérez.

Lo característico de la tercera nube de modalidades, ubicada en el cuadrante inferior izquierdo, es que no se tiene una opinión formada frente a los acontecimientos de 1992 y 1993. En efecto, aparecen con una contribución

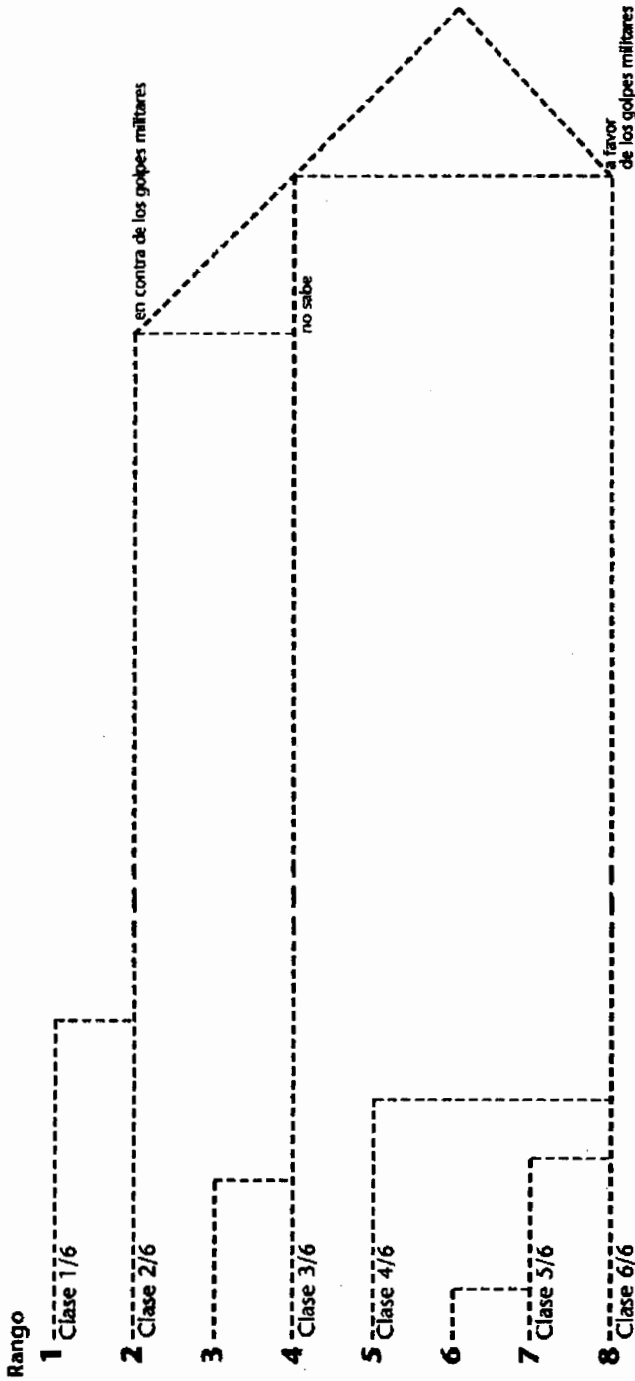
importante a la formación del eje *no sabe* si hay ocasiones en que se justifican los golpes militares (G?); *no sabe* si el 4F se justificaba (gf?) y *no sabe* si el 27N se justificaba (gn?). Aparecen también asociadas las modalidades *no sabe*, esta vez en relación con la respuesta del gobierno frente a los alzamientos militares (RG?) y la opinión acerca de la destitución de Pérez (DP?). Esta nube sugiere o bien un mercado *desinterés* en los asuntos políticos, da lo mismo un gobierno militar que uno civil, la destitución del presidente no es un hecho importante; o bien *perplejidad* y desconcierto frente a los hechos de insurgencia de 1992 y a la destitución del presidente.

Clasificación automática

Examinados los resultados anteriores se procedió a construir clases de individuos mediante el procedimiento de clasificación automática. Los individuos de la muestra fueron agrupados de acuerdo con las semejanzas de sus respuestas. El criterio taxonómico creó grupos en los cuales la semejanza es máxima al interior de cada clase y mínima entre las 7 clases resultantes. El dendograma resultante aparece en el gráfico 2. Dos de estas clases (3/7 y 4/7) agrupaban a los individuos que no tienen o no manifiestan su opinión en relación con los acontecimientos políticos de 1992 y 1993. Sólo las diferenciaba la modalidad que favorece la intervención de los militares en la política *cuando no se cumple la Constitución o cuando lo estimen necesario* compartida por 8% de los individuos de la clase 3/7. De manera que en la segunda etapa del análisis se decidió, ignorando esta pequeña diferencia, un corte en el dendograma que generó 6 clases de individuos. Resultando dos grupos con una orientación favorable a la democracia y que no legitiman la intervención militar; tres clases que la justifican, y un tercer conjunto en el cual están agrupados aquellos que no tienen opinión formada al respecto o son desinteresados en lo que a la política se refiere.

Clase 1/6: antigolpistas moderados

Esta clase está conformada por 388 individuos, un poco más de la cuarta parte (27%) de la muestra. Las personas agrupadas en esta clase no favorecen la intervención de los militares en los asuntos políticos a través de golpes de Estado. Por otra parte, piensan que la destitución de Pérez fue para *castigar la corrupción*. Los miembros de esta clase son claramente antigolpistas, rechazan



Fuente: Encuesta S1 2243

Gráfico 2
Dendrograma de la clasificación automática.

los golpes militares en general y no encuentran justificados los alzamientos de 1992. Sin embargo, creen que los militares pueden intervenir en los asuntos políticos cuando no se cumple la constitución o cuando lo estimen necesario. Esta aparente inconsistencia entre su repudio a las sublevaciones de 1992 y su apreciación de que la institución militar debe hacer que se cumpla el orden constitucional parece corresponderse con la representación del militar como actor político cuya función esencial es custodiar y preservar la democracia.

Las respuestas que no justifican ni las intentonas golpistas de 1992, ni los golpes militares en general son características. Más de la mitad (61%), y bastante por encima del resultado nacional (42%), de los individuos de la clase no justifica la sublevación del 4F y de aquellos que sostienen esta misma opinión 92% se ubica en la clase. Así mismo, en relación con el golpe del 27N, 52% de los venezolanos agrupados en esta clase lo considera *injustificado*, proporción equivalente a la nacional (50%). Por último, un poco más de la mitad de las personas de esta clase (58%) rechaza los golpes en general, proporción superior a los resultados nacionales (39%) para esta modalidad.

Aunque en una menor proporción, es también característica de la clase la opinión de que la actuación del gobierno de Pérez frente a las sublevaciones militares de 1992 fue *incorrecta*: 34% comparte esta apreciación. Este resultado, sin embargo, está bastante por debajo del nacional (71%). Asimismo, 32% de los individuos de este grupo opina que la destitución de Pérez fue una medida para *sancionar la corrupción*, proporción equivalente al resultado nacional (37%).

Clase 2/6: antigolpistas radicales

Esta clase agrupa a 15% (188 individuos) de la muestra es, por lo tanto, menos numerosa que la anterior. Estos venezolanos piensan que la respuesta del gobierno de Pérez a los alzamientos de 1992 fue *correcta* y se oponen también firmemente a la intervención militar en la política: no justifican ni el golpe del 4F ni el del 27N, rechazan; asimismo, los golpes en general y opinan que los militares *deben respetar el orden constitucional*. Asimismo, sostienen que la destitución de Pérez fue un acto de carácter político y obedeció a una venganza de sus enemigos. Los individuos de esta clase, en otras palabras, son también *firmemente antigolpistas* y tienen una *orientación democrática*. Se asemejan a la clase anterior porque su rechazo a los golpes expresa respeto pleno al orden democrático e internalización de las reglas políticas de la democracia; pero, se distinguen porque su rechazo al autoritarismo podría tener un contenido político

referido a la coyuntura vivida en Venezuela entre 1992 y 1993. En otras palabras, los venezolanos agrupados en esta clase podrían estar tomando posición a favor de Carlos Andrés Pérez, puesto que, además de evaluar como correcta la actuación del gobierno, puede decirse que no justifican las medidas tomadas contra el ex-presidente.

En cifras, las modalidades características indican lo siguiente. De los miembros de esta clase, más de la mitad, 57% cree *correcta* la actuación del gobierno para enfrentar las insurgencias militares de 1992, muy por encima del promedio nacional de 20%, y de todos los que sostienen esta opinión casi ochenta por ciento (78%) se ubica en la clase.

En cuanto a las intentonas golpistas de 1992, una tercera parte (34%) de los individuos de la clase estima que el golpe de febrero no se justificaba, un poco por debajo de la proporción nacional (42%), y casi todos los que sostienen esta opinión (95%) se encuentran en esta clase. Algo semejante ocurre con la respuesta que rechaza al golpe del 27N, 28% piensa que no se justificaba, proporción, sin embargo, que está muy por debajo de la nacional (50%). Por otra parte, 96% de los que así opinan es miembro de esta clase.

Es muy característica de este grupo la respuesta que considera la destitución del ex-presidente Pérez como un acto de naturaleza esencialmente política. En efecto, más de la mitad (59%) de los individuos agrupados en esta clase cree que fue una *venganza política*, y de todos los que así opinan 52% se ubica en esta clase. El contraste con los resultados nacionales (13%) es notable.

Casi 30 por ciento (27%) de los miembros de la clase piensa que *no hay ninguna ocasión* en la cual se justifique un golpe militar, y de todos los que sostienen esta opinión adversa, 71% se ubica en esta clase; 39% en los resultados nacionales.

En cuanto al papel de los militares en la vida del país, 39% de los individuos agrupados en esta clase piensa que deben respetar el orden constitucional, la mitad de los que eligieron esta modalidad se encuentra en esta clase; 34% en la muestra nacional.

Clase 3/6: ¿sin opinión o desinteresados?

Esta clase agrupa a 9,25% de la muestra entrevistada, es decir, 130 individuos. Es una de las agrupaciones más pequeñas. Típicamente estos vene-

zolanos *no tienen una opinión formada* con respecto a la intervención de los militares en los asuntos políticos o en relación con la destitución de Pérez. En otras palabras, estos individuos *no saben* si las intentonas golpistas de 1992 estaban justificadas; *no saben* si la actuación del gobierno fue correcta o incorrecta; *no opinan* en cuanto a la destitución de Pérez; y *no saben* cuál es el papel de las fuerzas armadas en la vida nacional. Estos resultados podrían estar indicando un marcado desinterés en los asuntos políticos en general. Sobre todo si se considera que los resultados nacionales para estas modalidades oscilan entre 4% (*no sabe cuál es el papel de los militares*) y 11% (*no sabe si los golpes se justifican*); en cambio para esta clase las proporciones alcanzadas por las alternativas concernidas varían entre 53% y 21%.

Clase 4/6: progolpistas, militares poder social

Esta clase está conformada por 19,35% de la muestra, 283 individuos. Los venezolanos y venezolanas agrupados en esta clase se caracterizan porque estiman que la destitución de Pérez fue un *castigo a la corrupción* y apoyan tanto los golpes militares en general, cuanto las *sublevaciones de 1992*. Así mismo creen que la respuesta del gobierno a los levantamientos fue *incorrecta* y que las fuerzas armadas deben *actuar en función de las demandas populares*. Puede decirse que estos individuos son *progolpistas*, sin duda encuentran legítima la intervención militar en los asuntos políticos y consideran al estamento militar como un acto político sensible que, atendió a las demandas del pueblo, actúe en función de ello. Podría pensarse que los individuos de esta clase ven a los militares como un *poder social* antes que como un poder neutral.

La respuesta frente a la destitución de Pérez es característica: la mitad (51%) de los individuos de la clase opina que fue un *castigo a la corrupción*, bastante por encima del promedio nacional (37%). Casi 100 por ciento de los que eligen esta modalidad se ubica en la clase.

Igualmente son características las respuestas que indican apoyo a los golpes de 1992. Casi 40 por ciento (38%) de los individuos agrupados en esta clase encuentra *justificado* el 4F, resultado, sin embargo, por debajo de la proporción alcanzada a nivel nacional por esta modalidad (51%); casi todos (99%) de los que eligieron esa modalidad pertenece a esta clase. Algo semejante ocurre con el 27N. 40% de los miembros de la clase *apoya* este golpe, resultado equivalente al nacional (41%); 86% de todos los que justifican este intento de golpe se ubica en esta clase. Igualmente, una tercera parte (34%) de los indivi-

duos de la clase opina que los golpes militares en general se *justifican*, y una gran mayoría (88%) de los que comparten esta opinión pertenece a este grupo. La modalidad alcanzó 51% en los resultados nacionales.

En cuanto a la actuación del gobierno frente a las insurrecciones de 1992, una cuarta parte (27%) de los individuos agrupados en esta clase estima que fue *incorrecta* y casi 100 por ciento de todos los que comparten este juicio se ubica en esta agrupación.

Clase 5/6: progolpistas coyunturales

Esta agrupación está conformada por 120 individuos, 9,33% de la muestra. En esta clase, al igual que en la anterior, se agrupan individuos con una opinión que *respalda claramente* la intervención violenta de las fuerzas armadas en la política. Son *progolpistas*. Sin embargo, se diferencian en que no los caracteriza ninguna modalidad que defina el rol de los militares en la vida nacional; y encuentran que la respuesta del gobierno ante los golpes de 1992 fue *correcta*. Se distinguen también porque para estos venezolanos la destitución de Pérez constituye una *venganza política*. Lo anterior sugiere que esta clase agrupa a los individuos que podrían apoyar un golpe de Estado más *en función de la coyuntura* que por principio. Es decir, podría tratarse de aquellos individuos que justifican las intenciones de 1992 bajo el supuesto de que operaron como un dispositivo de emergencia que reveló o "destapó" la crisis y alertó a la clase política sobre la grave situación que vivía el país.

La opinión de que la actuación del gobierno de Pérez, frente a la grave coyuntura política de 1992, fue *correcta* es característica de esta clase. Las proporciones revelan que 31% de los miembros de esta clase comparten ese juicio, algo por encima de los resultados nacionales (20%); mientras que 66% de todos los que así piensan se ubica en esta clase. La apreciación de que la destitución del ex-presidente es una *venganza política* es compartida por poco más de una tercera parte (36%) de las personas de esta clase, opinión compartida por 13% a nivel nacional; mientras que la mitad de los que así piensan se encuentran en este grupo.

En cuanto a la justificación de las insurgencias militares de 1992, 17% de los miembros de esta clase opina que el golpe del 4F se justificaba, y casi 100% de los que así piensan se ubica en esta clase. La proporción que justifica los golpes

militares en general (17%) y el segundo alzamiento de 1992 (16%) es, como puede verse, semejante.

Clase 6/6: progolpistas por principio

Esta clase agrupa a 20% de la muestra, es decir, 279 individuos. Pertenecen a ella los individuos *progolpistas por principio*. A diferencia de la clase anterior para estas personas la destitución de Pérez fue un acto de justicia. No solamente justifican los intentos de golpe de 1992 y tienen una opinión favorable hacia la intervención violenta de los militares en los asuntos políticos sino que, en correspondencia con lo anterior, estiman que la actuación de gobierno ante las intentonas fue *incorrecta* y, sobre todo, comparten dos ideas acerca del papel de las fuerzas armadas: *deben apoyar al pueblo e intervenir en la política de acuerdo a su propio juicio*. Estas orientaciones sugieren que estos venezolanos y venezolanas ven a los militares como los salvadores de la nación. Tienen una visión *mesianica* acerca del papel de los militares en la vida del país.

La modalidad que considera la destitución de Pérez como un *acto justo* es característica de esta clase. En efecto, casi la mitad (48%) la entiende así, un poco por encima del resultado nacional (41%). De todos los que comparten este juicio 97%, es decir, casi todos se ubican en la clase.

Característica de este grupo de individuos es también su opinión acerca del 4F. Casi 40 por ciento (39%) lo encuentra *justificado*, y de todos los que eligen esta modalidad 97% pertenece a la clase. Esta modalidad alcanza 51% en los resultados nacionales. Una proporción semejante a la primera (40%) *justifica* igualmente la intentona militar del 27N, equivalente a lo alcanzado por la modalidad a nivel nacional (41%); mientras que de todos los que lo apoyan 82% es miembro de la clase. Así mismo, una tercera parte de los individuos de esta agrupación sostiene una opinión *favorable* a las insurgencias militares en general, proporción inferior a los resultados nacionales (51%); de todos los entrevistados que así piensan 89% pertenece a esta clase.

Las acciones gubernamentales en relación con los levantamientos de 1992 son evaluadas como *incorrectas* por una cuarta parte de los individuos que pertenece a esta clase, y casi todos los que comparten este juicio, 97%, están en la clase.

En cuanto al papel de las fuerzas armadas en la vida nacional, una cuarta parte de la clase estima que su función debe ser *estar al lado del pueblo* (35% a

nivel nacional), mientras que otra cuarta parte piensa que los militares deben ser beligerantes en política *cuando lo estimen necesario* (35% en los resultados nacionales).

Discusión: El venezolano, los militares y la política

Globalmente considerados los resultados del análisis de correspondencias múltiples y de clasificación automática permiten hacer dos afirmaciones de carácter general. Primero, los venezolanos y venezolanas tienen opiniones políticas. Existe, ciertamente, una opinión configurada acerca del papel de los militares en la política, sobre la destitución del ex-presidente Pérez y en relación con la respuesta de su administración a las subversiones de 1992. En segundo lugar, se constata que la opinión está dividida entre aquellos que consideran la intervención y las insurgencias militares una forma legítima de acción política, y aquellos que, por el contrario, las rechazan y juzgan una salida autoritaria incompatible con la vida democrática.

Los ejes factoriales y las correspondencias

Los acontecimientos vinculados con la acusación y destitución del presidente Pérez sin duda estremecieron al país. Los resultados del análisis de correspondencias establecen, en primer lugar, que el venezolano tomó posición frente a estos hechos. Las modalidades que justifican la destitución del ex-presidente interpretan este hecho bien como un acto justo (DPj), o como una sanción a la corrupción (DPc). Ambas aparecen en el cuadrante inferior derecho del gráfico, opuestas a la modalidad que estima la salida de Pérez del poder como una venganza de sus enemigos políticos (DPv en cuadrante superior derecho). El eje 2 (vertical) permite distinguir las alternativas que suponen una toma de partido en relación con la crisis política ocurrida entre 1992 y 1993 de aquellas que evidencian un claro desinterés por los acontecimientos del mundo político. No podría afirmarse a la luz de estos resultados que al venezolano no le interesa la política. Por el contrario, es evidente que se toma partido y se expresa la opinión.

Los resultados indican que la opinión pública se dividió en relación con el rol de las fuerzas armadas en la vida nacional. En efecto, la opinión del

venezolano está escindida entre el rechazo a su intromisión en la política a través de golpes de Estado, y su aceptación o justificación. En el gráfico 1 se aprecia la rotunda oposición entre las modalidades que indican apoyo a las insurgencias y aquellas que indican rechazo, se encuentran en cuadrantes opuestos. Resulta interesante la constatación, en las dos nubes ubicadas hacia el lado derecho del gráfico, de las correspondencias existentes entre las modalidades que muestran aprobación de los alzamientos de 1992 y las opciones que evalúan la salida de Pérez de la presidencia como un acto de justicia o como castigo a la corrupción. Así mismo, existe asociación entre las modalidades que indican el rechazo de los golpes de estado como alternativa política, así como de los intentos de golpe de 1992 y la consideración de que Pérez fue víctima de sus opositores políticos. La posición tomada frente a las sublevaciones militares y en relación con el ex-presidente parecen ser los elementos articuladores de estas asociaciones. Estas correspondencias hacen pensar en el peso que la personalidad y el liderazgo de Pérez tuvieron en los acontecimientos políticos de comienzos de esta década⁸.

Los resultados de la clasificación automática, por otra parte, confirman claramente lo que se viene diciendo. La mayoría toma partido. Si se suman las proporciones de las clases que favorecen o desaprueban las insurgencias militares se constata que 49% de la población está a favor y 42% en contra. La proporción de aquellos que no emiten su opinión, o que puede no interesarles el asunto, es relativamente pequeña (9%). Esta toma de posición de la mayoría podría estar relacionada con el momento, octubre y noviembre de 1993, en que se captura la información. Siendo estos los meses previos a la elección presidencial, puede suponerse que la exposición de la población a los mensajes políticos es mayor que en otros momentos. Sin embargo, este hecho puede interpretarse más bien como interés por parte de la gente en los asuntos políticos. A pesar del desencanto lo que acontece en el campo político es importante para el venezolano.

8 Estos atributos del ex-presidente al ser aceptados o rechazados por la opinión pública, podrían ser una de las claves para explicar las enormes diferencias entre la reacción al gran viraje propuesto en el VII Plan de la Nación, y la reacción del venezolano a los ajustes macro económicos emprendidos por la administración Caldera.

Los actores y la tipología

Vista globalmente, la tipología construida sugiere la existencia en la cultura política tanto de orientaciones democráticas, cuanto de tendencias autoritarias y militaristas. En otras palabras, la opinión del país está dividida entre estas dos tendencias tal como se desprende de las proporciones resultantes (49% autoritarios y progolpistas, y 42% democráticos y antigolpistas). Las diferencias y matices existentes entre los tipos construidos, sin embargo, sugieren una fragmentación de la opinión y no permiten hablar de una polarización. Lo cual sin duda es una constatación de importancia.

De acuerdo a los resultados presentados, en 1993 casi uno de cada dos venezolanos habría considerado un golpe militar como una salida legítima a la crisis nacional. Pareciera que la tentación autoritaria no está sólo en partes del cuerpo militar, sino también en la gente. Dicho de otra manera, los datos parecen sugerir que la socialización política democrática no habría conseguido desterrar o sustituir en las representaciones políticas del venezolano la imagen de los militares como un actor con poder, fuerza y derecho para intervenir en los asuntos políticos. Quizás casi cuarenta años de funcionamiento democrático sean pocos para disolver las formas culturales del pasado. Pero, por otra parte, puede pensarse que esta representación de los militares como actores políticos se vincula con la democracia misma. En primer término, se relaciona con el hecho de que la institución militar jugó un papel protagónico tanto en el momento fundacional de la vida democrática en 1945, cuanto en el momento de restitución del orden democrático en 1958. En segundo lugar, se conecta con la difusión a través de la sociedad, después de 1958, de la imagen del militar como custodio y garante del funcionamiento democrático de la sociedad. Quizá esta peculiaridad sea una de las mayores fragilidades de la vida política en Venezuela.

Son evidentes también en los resultados las orientaciones que rechazan los golpes de estado como forma legítima de resolver la crisis política, y que en particular se oponen con firmeza a las dos sublevaciones de 1992. Para un sector importante de la población si se ha cumplido el proceso socializador y los procedimientos democráticos son valorados en sí y por sí mismos. Existe en estos grupos un compromiso con la democracia. Todo lo cual ha permitido la estructuración de una representación de la política en la cual no tiene cabida o no se considera legítima la intervención de las fuerzas armadas. Si bien es cierto que las orientaciones autoritarias existen, no lo es menos que buena parte de los

venezolanos y venezolanas es genuinamente demócrata y está comprometida con la democracia. Una consideración más detallada de los tipos resultantes permite establecer diferencias significativas entre estas dos orientaciones antagónicas de la cultura política.

Las orientaciones antidemocráticas

Los resultados permiten afirmar la existencia de tres orientaciones de naturaleza autoritaria, de acuerdo a la caracterización de los grupos de individuos en relación con las variables procesadas. La primera, sería una orientación claramente *antidemocrática* y *autoritaria* representada por la clase 6/6: progolpistas por principio. La segunda, representada en la clase 4/6, indicaría una tendencia que ve a las fuerzas armadas como un *poder social*; y, la tercera, una orientación de carácter más *coyuntural*, clase 5/6, aquellos individuos que, en circunstancias diferentes, quizás no se inclinarían por una salida militar.

La representación más claramente antidemocrática de la política, clase 6/6, tiene un fuerte contenido normativo. Estos individuos son lo más francamente hostiles a la democracia. Es posible que sean los herederos de una tradición institucional y cultural que acepta la violencia como parte del juego político y legítima sociológicamente la intervención de las fuerzas armadas. Es posible también que estos individuos se sientan inconformes y disgustados con lo que ha sido la democracia venezolana. Las insuficiencias y carencias de los regímenes democráticos, la complejidad que ha alcanzado la vida política en Venezuela, el evidente deterioro de las instituciones políticas, el desprestigio de las élites políticas y de los partidos han logrado que tendencias presentes en el venezolano, como las encontradas por Baloyra y Martz (1979:271), cristalicen en una posición dura frente al orden político.

Dicha posición no les permite visualizar una salida a ese estado de cosas sino mediante la fuerza y la toma violenta del poder por parte de las fuerzas armadas. De allí que sea la única clase tipificada por dos modalidades que justifican la intervención militar en la vida política. Se trataría de aquellos individuos que sólo han acumulado resentimientos y desconfianza en relación con la democracia y que tienen una baja tolerancia a situaciones de incertidumbre política. Todo ello habría confluído en la figura de Carlos Andrés Pérez, de allí que se evalúe su destitución como un acto de justicia y la respuesta de su gobierno a las sublevaciones se considere incorrecta dado que no le confieren

legitimidad ni a la democracia ni al gobierno. Estos venezolanos, tal vez, anhelan una vida política más simple, ordenada y previsible en la cual un poder autoritario les ponga a salvo del desconcierto, la indecisión y la complejidad que están presentes en la vida democrática, la cual, entre 1992 y 1993, alcanzó en Venezuela un alto grado de conflictividad.

La representación de la política que caracteriza a la clase 4/6, en cambio, aunque es también hostil a la democracia y al gobierno, se diferencia de la anterior en que su visión tiene menos contenidos normativos. Para empezar, lo más característico es que consideran la destitución de Pérez como un castigo a la corrupción, no lo evalúan como un acto justo sino desde un punto de vista más circunscrito a la situación. En segundo lugar, los tipifica la idea de que la institución militar no es un poder neutral, sino más bien un poder alternativo de naturaleza social que podría inclinar la balanza del mundo político a favor de las demandas populares. Los militares al lado del pueblo y en contra del poder político establecido cuando éste no escucha o no favorece al pueblo⁹.

Esta imagen parece corresponderse, como ya se ha dicho, con el papel que efectivamente ha jugado la institución militar en diferentes momentos históricos vinculados con la inserción de Venezuela en el orden democrático. Situaciones en las cuales las fuerzas armadas, ciertamente, interpretaron un rol central y estuvieron junto a sectores civiles, como se ha repetido tantas veces, al lado del pueblo. Al menos esto es lo que las élites políticas incansablemente han repetido durante décadas. Esta concepción, por otra parte, ha sido reforzada por la

9 Esta visión de los militares como un poder social se encuentra, en forma evidente, en la propia percepción de sí mismos que tienen los militares sublevados del 4F y del 27N. Se expresa con nitidez en los documentos que se conocen del MBR-200 (véase A. Zago, 1992: 21-60) Aparece también en varios reportajes y noticias publicadas en la prensa nacional durante los días siguientes al 4 de febrero y al 27 de noviembre. También ha sido expresada en diferentes remitidos y declaraciones de ambos grupos de oficiales insurgentes; así como en los análisis de diversos especialistas. Esta representación está articulada a la idea de la institución militar como un actor de peso en la preservación de la democracia. Es porque han sido socializados y formados bajo esta idea que ambos grupos de sublevados en 1992 justifican sus acciones. Se trata de revertir el proceso de perversión y de desvinculación con el pueblo que la democracia venezolana ha alcanzado. Faltaría por demostrar si esta imagen pública se corresponde efectivamente en los militares insurrectos con sus motivaciones reales.

dinámica política durante más de treinta años de régimen democrático. La institución militar ha custodiado la democracia, no sólo simbólicamente, como en el caso de las elecciones, sino real y efectivamente frente a sus enemigos tanto de derecha como de izquierda. Conviene recordar, en este sentido, las insurrecciones militares de distinto signo ocurridas entre 1958 y 1962, y los alzamientos armados de sectores de la izquierda que crearon un intenso clima de alta conflictividad política a mediados de los sesenta. El control de estos conflictos políticos estuvo en buena medida en manos de las fuerzas armadas. Los militares salvaron la democracia y estuvieron al lado del pueblo. En esta visión, por otro lado, podría estar influyendo la creencia bastante difundida, pero no establecida científicamente, acerca del origen social popular de los cuadros militares.

La tercera orientación de naturaleza antidemocrática estaría representada en la clase 5/6, los progolpistas circunstanciales o coyunturales. Este grupo, a diferencia de los dos anteriores, aunque apoya las sublevaciones de 1992 y encuentra que hay ocasiones en las cuales se justificaría un golpe militar, no está caracterizado por ninguna modalidad que indique una orientación normativa en relación con la intervención de las fuerzas armadas en la política. Por otro lado, se caracteriza por modalidades que indican una apreciación diferente de los acontecimientos políticos de 1992 y 1993. Para este grupo la actuación del gobierno frente a los levantamientos de 1992 fue correcta y la salida del poder de Carlos Andrés Pérez es interpretada como una venganza de sus adversarios políticos. Estiman como correcta la respuesta del gobierno porque su posición de apoyo a las subversiones de 1992 no es contra la democracia, sino contra el gobierno o, en todo caso, hostil a acciones gubernamentales específicas. Esta posición podría, antes que expresar una representación estructurada de la política en la cual la institución militar juegue un papel protagónico, estar indicando una posición circunstancial frente a la crisis política. Es bueno que los militares intervengan para que "los políticos se den cuenta de la situación que estamos viviendo". Esta opinión, como se ha reseñado en páginas anteriores, fue expresada por muchos venezolanos en los días posteriores a la primera intentona golpista. No se desea realmente una dictadura militar sino una democracia eficaz y efectiva.

Las orientaciones democráticas

Los resultados permiten identificar dos tendencias de orientación hacia la democracia, a partir de las variables que caracterizan a los grupos de individuos en relación con los acontecimientos políticos de 1992 y 1993. La primera, representada en la clase 1/6, está tipificada por un rechazo a la intervención de los militares en la política a través de golpes de estado, aunque esta oposición está matizada por la modalidad que justificaría la intervención cuando no se esté cumpliendo la Constitución o cuando los militares lo juzguen necesario. La segunda, correspondiente a la clase 2/6, indica la existencia de una representación estructurada del orden político en la cual se acepta plenamente el ordenamiento democrático y no se justifica, en ninguna circunstancia, la intervención militar en la política vía una insurrección.

Al comparar estos dos grupos de venezolanos con orientaciones democráticas un hecho resalta. Aunque comparten el rechazo tanto a las sublevaciones militares de 1992, cuanto a los golpes de estado como forma legítima de acción política, se distinguen, no obstante, por su posición específica frente a las acciones gubernamentales en relación con los alzamientos militares de febrero y noviembre, así como por su evaluación sobre la salida del poder de Carlos Andrés Pérez.

En relación con el primer tipo, es evidente que para estos individuos la democracia es legítima. Pero su posición frente a la actuación del gobierno los distingue pues consideran que ésta fue incorrecta. Este dato sumado a que podrían admitir una intervención de las fuerzas armadas en la política, sugiere tanto una pérdida de legitimidad del gobierno cuanto una demanda de eficacia. Al mismo tiempo hace pensar que se está en presencia de una representación de la política articulada también, en cuanto al papel de los militares en la vida nacional, a la imagen de la institución militar construida a lo largo de más de treinta años de democracia. Aunque esta no es la modalidad más característica de este tipo su presencia sugiere el efecto perverso de esta visión en las representaciones políticas del venezolano. Esta noción sobre las fuerzas armadas fue seguramente necesaria a partir de 1958 para desactivarlas como potencial agente de inestabilidad política. Pero, todo parece indicar que una nueva definición del papel de los militares se está haciendo necesaria. Por otra parte, la valoración acerca de la destitución de Pérez como un castigo a la corrupción

sugiere que para estos venezolanos con orientaciones democráticas la corrupción sería un motivo suficiente para permitir a los militares poner *orden* en el país.

El segundo tipo, individuos con una clara orientación democrática que no admitirían en ningún caso la intervención militar en los asuntos políticos, representa la clase más consistente en este sentido. Su representación de la política expresa lo que ha sido el núcleo duro de la definición de la democracia predominante en las élites modernizadoras. La democracia aún imperfecta es el mejor modo de gobierno y sólo por procedimientos democráticos pueden corregirse sus fallas. Esta idea de la democracia alude a una valoración sustantiva por parte de estos venezolanos de la democracia en general, y de la democracia venezolana en particular. En correspondencia con esta mentalidad se evalúa como correcta la actuación del gobierno ante las insurrecciones de 1992, es decir, se la considera legítima y se entiende que estas acciones eran su obligación de acuerdo a la constitución y las leyes. Sin embargo, estos venezolanos juzgan la destitución de Carlos Andrés Pérez como una venganza política. Esta es una de las modalidades más características de la clase en una proporción que está muy por encima del promedio nacional en relación con esta modalidad. Ello hace pensar, o bien que estos individuos podrían estar respondiendo a lealtades políticas partidistas, o bien reaccionando a la poderosa campaña de oposición a Pérez que se escenificó en el país durante los años previos a su destitución.

Es evidente en los resultados, al menos en lo que concierne a los acontecimientos políticos vividos en Venezuela en 1992 y en 1993, que en las representaciones políticas del venezolano se alojan imágenes contrapuestas acerca de la democracia y el papel de las fuerzas armadas en un régimen democrático. Si en la población existió efectivamente un consenso acerca del régimen, es decir, acerca de los procedimientos para decidir como se solucionan los conflictos políticos¹⁰, los resultados demuestran que este acuerdo ya no existe. En este sentido se confirman las apreciaciones de Sonntag y Maingón (1992), así como de Alvarez (1992) en cuanto al rompimiento del acuerdo que ha sostenido a la democracia venezolana.

Aunque los resultados demuestran una división de la opinión del venezolano en cuanto a las reglas del juego para enfrentar situaciones de conflicto

10 G. Sartori, 1993:58-59.

político, no puede hablarse de una opinión polarizada en cuanto a si deben ser resueltas a través de un golpe de estado o mediante procedimientos democráticos. En este sentido, los resultados confirmarían el análisis de Agüero (1993) en relación con el hecho de que la amenaza a la democracia venezolana en 1992 no se dio en el marco de una alta polarización.

Las diferencias encontradas entre las orientaciones antidemocráticas y democráticas, por otra parte, establecen distinciones que permiten pensar en la posibilidad de una reconstrucción de las representaciones políticas del venezolano. En la medida en que la democracia pueda satisfacer las demandas de bienestar, libertad, seguridad y justicia de los venezolanos, es razonable esperar que los individuos caracterizados como progolpistas coyunturales se inclinarían hacia el lado democrático. En el caso de aquellos progolpistas que comparten la idea de la institución militar como un poder social, si es cierta la interpretación de que esta visión ha sido producida por la democracia misma, entonces, es posible suponer que ella puede transformarla en la medida en que se defina un nuevo rol a la institución militar, de neutralidad en los asuntos políticos, más ajustado a las complejidades de una democracia contemporánea. Lo cual no necesariamente cambiaría su aceptación de los golpes militares como forma legítima de actuar políticamente, pero posiblemente podría hacerlos pensar en alternativas democráticas para resolver los conflictos.

En cuanto al tipo con orientaciones democráticas que, a pesar de rechazar los golpes de estado, aceptaría la intervención de los militares en la política, es posible conjeturar que, si se produce el cambio de que se viene hablando en cuanto al papel y la formación de los militares, podrían extenderse las orientaciones claramente democráticas y grupos de venezolanos como éste dejarían de pensar en ellos como una fuerza alternativa al poder civil, a la cual acudir en casos de emergencia. Quizá el punto más crítico de la tipología se encuentre en la orientación antidemocrática más extrema. Con los datos disponibles no es posible discernir si ésta es una tendencia que se ha mantenido en una proporción igual a lo largo de la vida democrática; o si se trata de una cristalización reciente debida al creciente malestar social que ha vivido el país durante la última década. En el caso de que progresivamente la población se inclinara hacia esta posición se estaría en una situación extremadamente difícil para la sobrevivencia de la democracia venezolana.

Finalmente, los resultados permiten hacer una precisión. Si es cierto que la unidad de las élites es y ha sido esencial para mantener la democracia (Agüero,

1993), no lo es menos que para una gran proporción de los venezolanos la democracia es importante y se valora el funcionamiento democrático de la sociedad. Como se evidencia en los resultados, existe en la cultura política de las masas una orientación antiautoritaria y desfavorable a los levantamientos militares en general y que no justifica las intentonas golpistas de 1992. Esta tendencia pudo incidir, efectivamente, en el hecho de que, a pesar del malestar existente en la población, los alzamientos de 1992 no encontraron el apoyo popular que, sin duda, los golpistas esperaban. Esta orientación bien pudo manifestarse como dice Njaim (1992) en forma pasiva. Los venezolanos no defendieron abiertamente en las calles a la democracia, pero tampoco la atacaron. De acuerdo a los resultados, entonces, puede afirmarse que en el fracaso del 4F y del 27N esta orientación democrática y antiautoritaria de una buena parte de la población jugó un papel importante. Con los datos disponibles no es posible discernir cuánto incidieron las orientaciones democráticas en la cultura política de las masas y cuánto la unidad de las élites. Pero, sin duda, ambas condiciones se combinaron para sostener la amenazada democracia venezolana. Si se acepta que, efectivamente, la realidad social misma es construida a través de los procesos de interacción social, mediante la construcción de representaciones e imágenes compartidas acerca del mundo social y, como en este caso, político, puede conjeturarse, entonces, que la visión del liderazgo sobre el orden político y la importancia de la democracia se ha convertido en saber, imágenes y comportamientos comunes, es decir, forma parte de la cultura política compartida por diferentes grupos sociales.

Conclusión

El análisis precedente permite delinear algunas conclusiones. En primer término, no se encuentra confirmación en los resultados a la presunción de que hay un proceso de despolitización en Venezuela. Por el contrario, la evidencia analizada permite afirmar que la política es importante para el venezolano. Es una minoría la que no toma posición o está desinteresada en los asuntos políticos. En segundo lugar, no se conforman las interpretaciones que suponen una pérdida total de la legitimidad sociológica de la democracia venezolana. Como revelan los resultados, hay orientaciones claramente hostiles a la democracia, pero no puede decirse que son las predominantes en la tipología. Por otra parte, la evidencia demuestra que existen sectores con una orientación firme hacia la

democracia. Expresada en su rechazo a la intervención de las fuerzas armadas en los asuntos políticos y en su repudio a las intentonas golpistas de 1992.

La evidencia sugiere que existen representaciones políticas divergentes en cuanto al papel de las fuerzas armadas en la vida nacional. La opinión del venezolano en relación con este tema está fragmentada. Sin embargo, no puede hablarse de polarización. Hay sectores sociales que consideran justificada su intervención en la política, mientras que hay otros sectores que no la favorecen. En este sentido, los resultados indican que en las representaciones políticas del venezolano está presente una imagen de la institución militar como preservadora de la democracia. Sectores importantes no la consideran un poder neutral en relación con los asuntos políticos, sino un poder alternativo de carácter social. Esta evidencia, por otra parte, sugiere un efecto perverso susceptible de ser corregido con una nueva definición acerca del papel de los militares en la democracia venezolana.

Bibliografía

- ALVAREZ, A. (1992). Crisis política y solución constituyente, **Politeia**, N° 15-17: 50, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, UCV.
- ALVAREZ, A. Coord. (1996). **El sistema político venezolano: Crisis y transformaciones**, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, UCV.
- AGÜERO, F. (1993). Las Fuerzas Armadas y el debilitamiento de la democracia en Venezuela, en A. SERBIN y otros (1993) **Venezuela la democracia bajo presión**, Caracas, INVESP/Nueva Sociedad.
- AGÜERO, F. (1995). *Debilitating Democracy: Political Elites and Military Rebels*, en L. GOODMAN y otros **Lessons of the Venezuelan Experience**, Washington, The W. Wilson Center Press/The Johns Hopkins University Press.
- BALOYRA, E. y J. MARTZ (1979) **Political Attitudes in Venezuela. Social Cleavages and Political Opinion**, Austin, University of Texas Press.
- BALOYRA, E. (1983) *Public Opinion and Support for the Regime*, en J. MARTZ y D. MYERS (1983) **Venezuela: The Democratic Experience**, New York, Praeger Publishers.
- BURGGRAFF, W. J. y R. L. MILLET (1995) *More than Failed Coups: The Crisis in Venezuelan Civil-Military Relations* en L. GOODMAN y otros **Lessons of the Venezuelan Experience**, Washington, The W. Wilson Center Press/The Johns Hopkins University Press.

- CARDOSO de DA SILVA, E. (1990) Militares y política: Propuestas para el estudio del caso venezolano, en C.J. MONETA, **Comp. Civiles y militares. Fuerzas Armadas y tradición democrática**, Santiago de Chile, Comisión Sudamericana de Paz/Nueva Sociedad.
- ESPAÑA, L. P. (1992a) La viabilidad de la democracia venezolana, en **Amaneció de golpe**, Caracas, IIES, UCAB.
- ESPAÑA, L. P. (1992b) ¿Qué reveló el golpe?, **Revista SIC**, Año LV, N° 542.
- GOODMAN, L. y otros (1995) **Lessons of the Venezuelan Experience**, Washington, The W. Wilson Center Press/The Johns Hopkins University Press.
- LUENGO, N.L. (1992) La democracia antes del alzamiento militar, en **Amaneció de golpe**, Caracas, IIES, UCAB.
- NAIM, M. (1993) **Paper Tigers and Minotaurs**, Washington, Carnegie Endowment Books.
- NJAIM, H. y otros (1993) **Problemas de legitimidad, opiniones políticas y democracia en Venezuela**, Informe final, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, UCV/IFEDEC-ULA.
- PONCE, M.G. (1992) El relato y las informaciones, en **Amaneció de golpe**, Caracas, IIES, UCAB.
- REY, J.C. (1980) **Problemas sociopolíticos de América Latina**, Caracas, Ateneo de Caracas/Edit. Jurídica Venezolana.
- REY, J.C. (1987) El futuro de la democracia en Venezuela, en J. A. SILVA MICHELENA Coord., **Venezuela hacia el año 2000. Desafíos y opciones**. Caracas, Nueva Sociedad.
- RODRÍGUEZ, F. (1996) Política, militares y democracia en Venezuela, en A. ALVAREZ **El sistema político venezolano: Crisis y transformaciones**, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, UCV.
- ROMERO, A. (1994) **Decadencia y crisis de la democracia**, Caracas, Panapo.
- SARTORI, G. (1993) **¿Qué es la democracia?**, Bogotá, Altamir Ediciones, 1994.
- SONNTAG, H. y T. MAINGON (1992) **Venezuela: 4F 1992. Un análisis sociopolítico**, Caracas, Nueva Sociedad.
- SOSA, A. (1992a) Los actores políticos, **Revista SIC**, Año LV, N° 542:73-74.
- SOSA, A. (1992b) La muerte del presidente, **Revista SIC**, Año LV, N° 542:60-61.
- SOSA, A. (1992c) Las FF.AA., la democracia y el Movimiento Nacionalista Bolivariano Revolucionario - 2000, **Revista SIC**, Año LV, N° 542:68-70.

- SOSA, A. (1993) El 27 de noviembre de 1992, **Revista SIC**, Enero-Febrero 1993:37-46.
- TARRE BRICEÑO, G. (1994) **4 de Febrero. El espejo roto**, Caracas, Panapo.
- TEMPLETON, A. (1995) The evolution of Popular Opinion en L. GOODMAN y otros **Lessons of the Venezuelan Experience**, Washington, The Woodrow Wilson Center Press/The Johns Hopkins University Press.
- ZAGO, A. (1992) **La rebelión de los ángeles**, Caracas, Fuentes Editores.